

Señores.

JUZGADO CUARTO (4°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA (V)
j04activobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76-111-33-33-003-2023-00044-00 acumulado con el
76-111-33-33-002-**2023-00086**-00
DEMANDANTES: CARLOS ANDRES REBOLLEDO ESPINOSA y otros.
DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y OTROS.
LLAMADO EN GTÍA.: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y otro.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de la compañía de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio principal en la carrera 80 No. 6 – 71 de la Ciudad de Cali – Valle del Cauca, identificada con el NIT. 891.700.037-9, representada legalmente por el Doctor Pablo Revuelta Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.797.379, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se aporta con el presente documento, y el Certificado de Cámara de Comercio donde se observa el mandato general a mi conferido a través de Escritura Pública No. 1804 del 20 de junio de 2003 otorgada en la Notaría 35 de la ciudad de Bogotá. En ejercicio de tal facultad y encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por el señor Carlos Andrés Rebolledo Espinosa en contra del Departamento del Valle y otros y en segundo lugar, a **CONTESTAR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA** formulados por el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** contra mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hace a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su despacho tanto en la demanda como en el llamamiento en garantía, en los siguientes términos:

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

Teniendo en consideración que el Auto Interlocutorio No 493 del 6 de noviembre de 2024 se notificó por estados electrónicos el 6 de noviembre de la misma anualidad sin que hasta la fecha se realice la notificación electrónica a través de mensaje de datos por parte del despacho, se concluye que este escrito es presentado dentro del término establecido sin que ello implique la renuncia de términos cuando se realice la notificación efectiva.

CAPÍTULO II. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Es importante señalar al despacho que a pesar de que el proceso con 76-111-33-33-002-2023-00086-00 fue acumulado con el proceso No. 76-111-33-33-003-2023-00044-00, en ambos asuntos el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** llamó en garantía a **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, sin embargo, el despacho mediante auto interlocutorio No. 493 del 6 de noviembre de 2024 únicamente se pronunció y admitió el llamamiento en garantía formulado por el INVIAS contra MAPFRE en el proceso **2023-00086**. Tal y como se observa en la imagen adjunta extraída del texto original:

1. Asunto

Procede el Despacho a resolver la solicitud de llamamiento en garantía formulada dentro del proceso identificado con el radicado **76-111-33-33-002-2023-00086-00**.

Por lo anterior, se encuentra pendiente el pronunciamiento del despacho frente al llamamiento en garantía que formuló el INVIAS contra Mapfre en el proceso con radicación 76-111-33-33-003-2023-00044-00, toda vez que en este escrito únicamente nos pronunciaremos frente al llamamiento en garantía aceptado por el despacho en el auto en mención.

CAPÍTULO III. SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA POR LA CONFIGURACIÓN DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

De conformidad con los hechos de la demanda, el supuesto accidente de tránsito donde falleció el señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ocurrió en la vía Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente por el supuesto mal estado de una valla publicitaria. Sin embargo, es menester indicar desde ya que, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el contrato de Concesión No. 64001 de 1993 suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. PISA para que realice por su cuenta y riesgo, la construcción, conservación, mantenimiento, explorar y operar la calzada existente que une las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la alambrada). Es decir, que dicho tramo vial no se encuentra a cargo del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, sino que a la fecha se encuentra concesionada y cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** Razón por la cual el **INVIAS** no está legitimado para comparecer como demandado.

Sea lo primero advertir que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 el cual modifica algunos artículos del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha tenido a bien el legislador, incorporar la figura denominada sentencia anticipada, por cumplimiento de los presupuestos procesales indicados de manera expresa dentro de la normativa aplicable.

Especialmente, preceptúa la norma en comento:

“ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: (...)

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

(...) (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

Así las cosas, correspondería en este caso de manera ineludible, proceder por parte del despacho, a reconocer mediante sentencia anticipada y en aplicación de los preceptos enunciados, la configuración del fenómeno prescriptivo de las acciones ordinarias derivadas del contrato de seguros, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos que procedo a exponer a continuación:

Sobre la legitimación en la causa, el Consejo de Estado¹ ha señalado lo siguiente:

LEGITIMACION EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACION EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (...) la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. (...) **la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas** (...) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso. **(negrilla y subrayada por fuera del texto original)**

A partir de lo anterior se concluye que no existe legitimación en la causa por pasiva **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, pues este no participó en la causación del daño alegado por la parte actora pues no fue su actuar negligente ni omisivo el que generó la causa de la presente demanda, toda vez que la vía donde aparentemente ocurrieron los hechos no se encuentra bajo su cargo.

Enunciado lo anterior, es preciso hacer hincapié en lo señalado en el Contrato de Concesión No. 64001 de 1993 suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. PISA el cual evidencia que la carretera de Buga – Tuluá se encuentra a cargo de esta última sociedad en virtud de la concesión celebrada. Tal y como se observa en la imagen adjunta:

¹ sentencia de 23 de abril de 2008, exp.16271; sentencia de 31 de octubre de 2007, exp. 13503 y sentencia de 20 de septiembre de 2001, exp.10973

CONTRATO No. GH001 DE 1993 DE OBRA PUBLICA.
PARA LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE CONCESION
DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UNA NUEVA
CALZADA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA
CARRETERA BUGA TULUA LA PAILA, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA
ABCISA K 67+100 Y LA ABCISA K 128+100

(...)

Pública Internacional No. 001/93. CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. EL
CONCESIONARIO se obliga por medio de este contrato de obra pública
por el sistema de concesión, según lo establecido en el Decreto
Extraordinario Departamental 1300/92, a construir, conservar,
mantener, explotar y operar la Segunda Calzada de la vía que une
las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la alambrada) y a
rehabilitar, conservar, mantener, explotar y operar la calzada
existente que une las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la
alambrada). Las actividades incluidas para cumplir el objeto del
contrato son: el diseño para construcción, la financiación, la
construcción, el suministro, la instalación, el montaje y la prueba
de los equipos, la puesta en funcionamiento y la operación del
proyecto, las cuales deben hacerse en un todo de acuerdo con las
condiciones, términos, alcances y obligaciones establecidas en este
documento, en el Pliego de Condiciones y en la propuesta del
concesionario aceptada por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a
través de la Gerencia para Macroproyectos mediante resolución de
adjudicación Nro.0832 de Noviembre 30 de 1993. CLAUSULA SEGUNDA.

Lo anterior, no es un hecho ajeno o desconocido por el Departamento del Valle del Cauca, pues ellos mismos en el Oficio No. 1.310.02.18 SADE 2023359623 del 10 de agosto de 2023 elaborado por el señor Juan David Mcbrown – Subsecretario de Planeación y Macroproyectos de la Infraestructura Transporte (E) de la Gobernación del Valle del Cauca reconocen que la vía donde supuestamente ocurrieron los hechos se encuentra a su cargo pero concesionada con la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** al respecto señalan lo siguiente:

Mediante comunicación del asunto recibido a este despacho el día 10 de agosto donde solicita certificar: "la vía que conduce del municipio de Buga a el Municipio de Tuluá Kilómetro 76+725 metros, a la altura del corregimiento de presidente" se encuentra a cargo del departamento. Me permito dar respuesta informando lo siguiente:

(...)

la vía Troncal de Occidente con código 2505 localizada entre Tuluá – Andalucía (a la cual hace mención en su solicitud) es de competencia nacional, sin embargo, desde el 30 de diciembre de 1993 se firmó contrato de concesión entre la Gobernación del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA

(...)

En virtud de lo anterior, la vía mencionada está actualmente a cargo del departamento del valle del cauca, la cual fue construida, operada y mantenida por el concesionario PISA.

De las pruebas anteriormente referenciadas, se evidencia que la vía Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente se encuentra a cargo del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** quien a través del negocio contractual denominado concesión la entregó a la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** desvirtuando con ello la incorrecta imputación de responsabilidad que le atribuye la parte actora al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

De acuerdo a lo consignado en la ficha técnica de la página oficial² del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** este se encuentra a cargo de ejecutar los planes, programas, políticas y estrategias sobre proyectos de la infraestructura NO CONCESIONADA (mayúscula propia) tal y como se observa en la imagen adjunta:

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura **no concesionada de la Red Vial Nacional** de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. En aras del cumplimiento de su misión, la entidad, produce y procesa diariamente datos inherentes a la infraestructura vial del país la cual es procesada para poder brindar información consistente, fiable y oportuna con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Es decir que si los hechos ocurrieron en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente la cual se encuentra concesionada a cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** esta no se encuentra a cargo del **INVIAS** por lo tanto no será responsable por los hechos u actuaciones que surjan en este tramo vial.

Así las cosas, es evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** en esta contienda, pues no es la entidad encargada de la conservación de ese tramo vial ubicado específicamente entre Buga - Tuluá. De ahí, que resulte diáfano que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** no es la entidad encargada de la conservación de esa vía y por tal motivo, no resulta jurídicamente viable que se le haga responsable por acciones u omisiones que no estaban a su cargo. Además, éste no tuvo ninguna injerencia en el desarrollo y

² Ficha metodológica – consultado en: <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/proyectos-invias/red-nacional-de-carreteras/14617-ficha-metodologica-estadisticas-del-estado-de-la-red-vial-primaria/file#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20V%C3%ADAs,proyectos%20de%20la%20infraestructura%20no>

ejecución de la conservación y/o mantenimiento del tramo vial donde presuntamente ocurrió el hecho objeto del presente proceso y mal haría el despacho en responsabilizar al **INVIAS** por hechos que no son imputables a este y en los que no tuvo participación alguna

En conclusión, respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción y desvincular al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** del presente proceso, al no ser la entidad llamada a responder por los hechos ocurridos el **6 de septiembre de 2024** en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente. Se reitera, toda vez que el **INVIAS** no está legitimada en la causa por pasiva porque la vía no se encontraba a su cargo ni mucho menos bajo su cuidado y de esa manera, debe ser absuelto de toda responsabilidad que pretenda endilgársele.

CAPÍTULO IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS “HECHOS” DE LA DEMANDA.

Frente al hecho denominado “PRIMERO”: En este hecho se realizan varias aseveraciones, frente a las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se desarrollaron los hechos acaecidos **6 de septiembre de 2021**, toda vez que, en primer lugar, la compañía no se encontraba en el lugar de los hechos, segundo lugar, se trata de una situación ajena al objeto comercial que desarrolla y en tercer lugar, el agente de tránsito no es testigo presencial de los hechos máxime cuando en el informe policial de accidente de tránsito se plasmó que este arrió 32 minutos después de ocurrido el hecho, por lo que no conoce las nociones propias que involucran estos hechos. Por lo anterior, es la parte actora quien debe acreditar lo aquí señalado.

Sin embargo y en gracia de discusión es importante señalar al despacho que, en primer lugar, los hechos ocurrieron en un tramo vial que no se encuentra a cargo del **INVIAS**, pues el tramo de carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente se encuentra concesionada a cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** ya que el **INVIAS** entregó este tramo a la **Agencia Nacional de Infraestructura - ANI** y este a su vez la transfirió al **Departamento del Valle** quien finalmente suscribió un contrato de concesión con la sociedad mencionada tal y como se evidencia en el ACTA ENTREGA BUGA-LA PAILA 14-AGT-1992. pdf; CONVENIO No. 583 DE 1992 BUGA LA PAILA aportado al despacho por el **INVIAS**, siendo así esta entidad no se encuentra legitimado en la causa para responder por situaciones que no se encuentran bajo su responsabilidad. En segundo lugar, desde la misma narrativa de los hechos de la demanda la parte actora confiesa que el lamentable fallecimiento del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ocurrió cuando este fue atropellado por un vehículo de placas **WCR-264** que era conducido por el señor Jairo Enrique Martínez Suarez, es decir que la muerte no la causó la valla publicitaria si no cuando el automotor lo colisiona. Y, en tercer lugar, se desconoce cuál, que tipo y a que valla

publicitaria se refiere el agente de tránsito que se encuentra falta de mantenimiento, máxime cuando en el mercado existen sendas diferencias entre comerciales, de tránsito o informativas del Gobierno Nacional. Por lo anterior, es fácilmente concluir que los hechos ocurrieron en un tramo vial que no se encuentra a cargo del INVIAS y por las maniobras de un tercero determinado ajeno a esta entidad por lo que es procedente su desvinculación del proceso.

- Por otro lado, no es cierto cuando la parte actora señala que “se presentó un accidente de tránsito presuntamente imputable según hipótesis establecida por la autoridad de Tránsito, consistente en la falta de la conservación y mantenimiento de la estructura de la vallas informativas de la señalización vial de ese sector vial” toda vez que en el informe policial de accidente de tránsito No. C-01231404 se indicó como hipótesis a la vía “308” correspondiente a “falta de mantenimiento sobre la estructura de la vía (vallas de información)”, Tal y como se observa en la imagen adjunta:

TOTAL VICTIMAS	PEATÓN 01	ACOMPAÑANTE	PASAJERO	CONDUCTOR	TOTAL HERIDOS	MUERTOS 01
HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO						
DEL CONDUCTOR			DEL VEHICULO			DEL PEATÓN
ESPECIFICAR, CUAL: <i>Falta de mantenimiento sobre estructuras de la vía (vallas de información)</i>						

De la imagen anterior se evidencia que por ningún lado se mencione que dicha valla corresponda a una valla informativa de señalización de ese sector vial como erróneamente lo señaló la parte actora.

Frente al hecho denominado “SEGUNDO”: A mi representada no le consta de manera directa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente se desarrollaron los hechos en los que lamentablemente fallece el señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. toda vez que, en primer lugar, la compañía no se encontraba en el lugar de los hechos y segundo lugar, se trata de una situación ajena al objeto comercial que desarrolla. Por lo anterior, es la parte actora quien debe acreditar lo aquí señalado.

Sin embargo, de la misma narrativa de este hecho de la demanda la parte actora confiesa que el lamentable fallecimiento del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ocurrió cuando este fue atropellado por un vehículo de placas **WCR-264** que era conducido por el señor Jairo Enrique Martínez Suarez, es decir que la muerte no la causó la valla publicitaria si no cuando el automotor lo colisiona, viéndose configurada así el eximente de responsabilidad denominado hecho exclusivo y determinante de un tercero que es ajeno a las actividades que desarrolla el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** por lo tanto deberá ser absuelto de todo tipo de responsabilidad y correr la misma suerte la aseguradora llamada en garantía por este, **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**

Frente al hecho denominado “TERCERO”: No le consta a mi prohijada de manera directa el estado actual del proceso de investigación penal que se llevó a cabo por el fallecimiento del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ni mucho menos los argumentos bajo los cuales se archivó el mismo, toda vez que se trata de hechos que ocurrieron por fuera de la órbita comercial de la compañía.

Sin embargo, es importante desde ya señalar al despacho que la responsabilidad penal no persigue los fines de una responsabilidad civil es por ello que son disimiles entre sí. Razón por la cual no podrá tenerse la investigación penal como prueba fehaciente para absolver de responsabilidad al conductor del vehículo de placas **WCR-264** en esta contienda pues la responsabilidad que se discute se deriva de un tema meramente objetivo al encontrarse ejerciendo una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores y recayendo sobre este una presunción de culpa. Y, por el contrario, en la responsabilidad penal que siempre es subjetiva se investiga la comisión de un hecho ilícito. Por lo tanto, si el proceso se encuentra archivado o no, no es óbice para pensar que el conductor no es responsable civilmente.

Frente al hecho denominado “CUARTO”: A mi prohijada no le consta de manera directa el contenido del informe de necropsia del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. toda vez que la compañía no participó en la elaboración del informe. Por lo que la parte actora deberá acreditar lo aquí señalado.

Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que la forma de fallecimiento del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. señalado en este hecho como de “manera violenta” refiere al impacto que el fallecido recibió de un vehículo automotor conducido por un tercero diferente al INVIAS y no por causas imputables a esta parte pasiva.

Frente al hecho denominado “QUINTO. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LA VICTIMA”: No le consta a mi prohijada de manera directa el supuesto dolor, aflicción, nostalgia y congoja que sufrió el grupo familiar del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. toda vez que se trata de aseveraciones enteramente moralistas con carente material probatorio. Por ende, deberá la parte actora canalizar su esfuerzo procesal y acreditar lo aquí señalado.

Frente a los hechos denominados “SOBRE LOS RESPONSABLES DIRECTOS, TERCEROS Y GARANTES DEL PAGO D PERJUICIOS”

Frente al hecho denominado “1.-”: No es cierto como esta planteado. De acuerdo a lo consignado en la ficha técnica de la página oficial³ del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** este se encuentra a cargo de ejecutar los planes, programas, políticas y estrategias sobre proyectos de la infraestructura NO CONCESIONADA (mayúscula propia) tal y como se observa en la imagen adjunta:

³ Ficha metodológica – consultado en: <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/proyectos-invias/red-nacional-de-carreteras/14617-ficha-metodologica-estadisticas-del-estado-de-la-red-vial-primaria/file#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20V%C3%ADAs,proyectos%20de%20la%20infraestructura%20no>

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. En aras del cumplimiento de su misión, la entidad, produce y procesa diariamente datos inherentes a la infraestructura vial del país la cual es procesada para poder brindar información consistente, fiable y oportuna con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Es decir que si los hechos ocurrieron en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente la cual se encuentra concesionada a cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** esta no se encuentra a cargo del **INVIAS** por lo tanto no será responsable por los hechos u actuaciones que surjan en este tramo vial.

Frente al hecho denominado “2*.-”: No existe dentro del plenario una prueba que acredite lo dicho en este hecho por el apoderado de la parte actora, máxime cuando el mismo será objeto del presente litigio.

Frente al hecho denominado “3.-”: No le consta a mi prohijada lo señalado en este hecho, máxime cuando se trata de una apreciación meramente subjetiva con carente material probatorio.

Frente al hecho denominado “4.-”: No le consta a mi prohijada lo señalado en este hecho, máxime cuando se trata de una apreciación meramente subjetiva con carente material probatorio.

Frente al hecho denominado “SOBRE EL TITULO JURIDICO DE IMPUTACIÓN”: Lo consignado en este párrafo no corresponde a la narración cronología de un hecho como lo establece el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, si no por el contrario, a una mera apreciación subjetiva realizado por el apoderado de la parte actora y la cual será objeto del presente litigio.

Sin embargo, es menester indicar al despacho que el **INVIAS NO** tiene a su cargo el mantenimiento, cuidado y construcción del tramo vial donde ocurrieron los hechos objeto del presente litigio, razón por la cual no desatendió ninguna obligación legal ni reglamentaria.

II. FRENTE A “LO QUE SE DEMANDA O PRETENDE” DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. En las pretensiones de la demanda es notorio el deseo desproporcionado del extremo actor por lucrarse, debido a que no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos esenciales para que se configure la eventual responsabilidad en cabeza del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

Frente la pretensión denominada “**PRIMERA**”: Respetuosamente manifiesto al Despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a que se acceda a la solicitud de declaratoria de responsabilidad de una de las entidades demandadas, en especial del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** por los supuestos perjuicios ocasionado a los demandantes en el aparente accidente del **6 de septiembre de 2021**. Lo anterior, toda vez que la vía donde ocurrieron los hechos objeto del presente litigio no se encontraba a cargo del **INVIAS**, es decir, al no tener la vía a su cargo claramente no se encuentra legitimado en la causa por pasiva y de esa manera, debe ser absuelto de toda responsabilidad que pretenda endilgársele. Así mismo, se evidencia que los hechos ocurrieron porque el vehículo de placas **WCR-264** atropelló al señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. situación que configura un hecho exclusivo y determinante de un tercero y en ese sentido, exoneraría de todo tipo de responsabilidad a las entidades demandadas.

Adicionalmente, no hay ningún tipo de evidencia en el plenario que establezca que por parte del **INVIAS** se desarrolló alguna conducta negligente u omisiva que hubiese sido la desencadenante de los hechos reprochados.

Frente la pretensión denominada “**SEGUNDA**”: Frente a la solicitud de perjuicios morales, respetuosamente manifiesto al Despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a que se condene a las entidades demandadas, en especial del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** a indemnizar al aquí demandante por los supuestos daños morales sufridos toda vez que no hay responsabilidad, por cuanto los mismos son totalmente improcedentes máxime cuando fue el actuar del tercero determinado, el conductor del vehículo de placas **WCR-264** quien atropelló con el automotor que manejaba al señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. y le causó la muerte, situación que configura un hecho exclusivo y determinante de un tercero, y exoneraría de todo tipo de responsabilidad a las entidades demandadas. Por otro lado, la vía donde ocurrieron los hechos objeto del presente litigio no se encontraba a cargo del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, es decir, al no tener la vía a su cargo claramente no se encuentra legitimado en la causa por pasiva y de esa manera, debe ser absuelto de toda responsabilidad que pretenda endilgársele.

III. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que el demandante no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad patrimonial que pretende endilgarse a la parte demandada en este litigio.

Sustento la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio de conformidad con las siguientes excepciones:

A. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

De conformidad con los hechos de la demanda, el supuesto accidente de tránsito donde falleció el señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ocurrió en la vía Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente por el supuesto mal estado de una valla publicitaria. Sin embargo, es menester indicar desde ya que, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el contrato de Concesión No. 64001 de 1993 suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. PISA para que realice por su cuenta y riesgo, la construcción, conservación, mantenimiento, explorar y operar la calzada existente que une las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la alambrada). Es decir, que dicho tramo vial no se encuentra a cargo del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, sino que a la fecha se encuentra concesionada y cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** Razón por la cual el **INVIAS** no está legitimado para comparecer como demandado.

Sobre la legitimación en la causa, el Consejo de Estado⁴ ha señalado lo siguiente:

LEGITIMACION EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACION EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (...) la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. (...) **la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas** (...) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso. **(negrilla y subrayada por fuera del texto original)**

A partir de lo anterior se concluye que no existe legitimación en la causa por pasiva **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, pues este no participó en la causación del daño alegado por la parte actora pues no fue su actuar negligente ni omisivo el que generó la causa de la presente demanda, toda vez que la vía donde aparentemente ocurrieron los hechos no se encuentra bajo su cargo.

Enunciado lo anterior, es preciso hacer hincapié en lo señalado en el contrato de concesión No. 64001 de 1993 suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. PISA el cual evidencia que la carretera de Buga – Tuluá se encuentra a cargo de esta última sociedad en virtud de la concesión celebrada. Tal y como se observa en la imagen adjunta:

⁴ sentencia de 23 de abril de 2008, exp.16271; sentencia de 31 de octubre de 2007, exp. 13503 y sentencia de 20 de septiembre de 2001, exp.10973

CONTRATO No. GH001 DE 1993 DE OBRA PUBLICA.
PARA LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE CONCESION
DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UNA NUEVA
CALZADA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA
CARRETERA BUGA TULUA LA PAILA, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA
ABCISA K 67+100 Y LA ABCISA K 128+100

(...)

Pública Internacional No. 001/93. CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. EL
CONCESIONARIO se obliga por medio de este contrato de obra pública
por el sistema de concesión, según lo establecido en el Decreto
Extraordinario Departamental 1300/92, a construir, conservar,
mantener, explotar y operar la Segunda Calzada de la vía que une
las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la alambrada) y a
rehabilitar, conservar, mantener, explotar y operar la calzada
existente que une las Ciudades de Buga-Tuluá-La Paila (Cruce de la
alambrada). Las actividades incluidas para cumplir el objeto del
contrato son: el diseño para construcción, la financiación, la
construcción, el suministro, la instalación, el montaje y la prueba
de los equipos, la puesta en funcionamiento y la operación del
proyecto, las cuales deben hacerse en un todo de acuerdo con las
condiciones, términos, alcances y obligaciones establecidas en este
documento, en el Pliego de Condiciones y en la propuesta del
concesionario aceptada por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a
través de la Gerencia para Macroproyectos mediante resolución de
adjudicación Nro.0832 de Noviembre 30 de 1993. CLAUSULA SEGUNDA.

Lo anterior, no es un hecho ajeno o desconocido por el Departamento del valle del cauca, pues ellos mismos en el oficio No. 1.310.02.18 SADE 2023359623 del 10 de agosto de 2023 elaborado por el señor Juan David Mcbrown – Subsecretario de Planeación y Macroproyectos de la Infraestructura Transporte (E) de la Gobernación del Valle del Cauca reconocen que la vía donde supuestamente ocurrieron los hechos se encuentra a su cargo pero concesionada con la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** al respecto señalan lo siguiente:

Mediante comunicación del asunto recibido a este despacho el día 10 de agosto donde solicita certificar: "la vía que conduce del municipio de Buga a el Municipio de Tuluá Kilómetro 76+725 metros, a la altura del corregimiento de presidente" se encuentra a cargo del departamento. Me permito dar respuesta informando lo siguiente:

(...)

la vía Troncal de Occidente con código 2505 localizada entre Tuluá – Andalucía (a la cual hace mención en su solicitud) es de competencia nacional, sin embargo, desde el 30 de diciembre de 1993 se firmó contrato de concesión entre la Gobernación del Valle del Cauca y Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA

(...)

En virtud de lo anterior, la vía mencionada está actualmente a cargo del departamento del valle del cauca, la cual fue construida, operada y mantenida por el concesionario PISA.

De las pruebas anteriormente referenciadas, se evidencia que la vía Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente se encuentra a cargo del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** quien a través del negocio contractual denominado concesión la entregó a la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** desvirtuando con ello la incorrecta imputación de responsabilidad que le atribuye la parte actora al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

De acuerdo a lo consignado en la ficha técnica de la página oficial⁵ del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** este se encuentra a cargo de ejecutar los planes, programas, políticas y estrategias sobre proyectos de la infraestructura NO CONCESIONADA (mayúscula propia) tal y como se observa en la imagen adjunta:

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura **no concesionada de la Red Vial Nacional** de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. En aras del cumplimiento de su misión, la entidad, produce y procesa diariamente datos inherentes a la infraestructura vial del país la cual es procesada para poder brindar información consistente, fiable y oportuna con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Es decir que si los hechos ocurrieron en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente la cual se encuentra concesionada a cargo de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** esta no se encuentra a cargo del **INVIAS** por lo tanto no será responsable por los hechos u actuaciones que surjan en este tramo vial.

Así las cosas, es evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** en esta contienda, pues no es la entidad encargada de la conservación de ese tramo vial ubicado específicamente entre Buga - Tuluá. De ahí, que resulte diáfano que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** no es la entidad encargada de la conservación de esa vía y por tal motivo, no resulta jurídicamente viable que se le haga responsable por acciones u omisiones que no estaban a su cargo. Además, éste no tuvo ninguna injerencia en el desarrollo y

⁵ Ficha metodológica – consultado en: <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/proyectos-invias/red-nacional-de-carreteras/14617-ficha-metodologica-estadisticas-del-estado-de-la-red-vial-primaria/file#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20V%C3%ADAs,proyectos%20de%20la%20infraestructura%20no>

ejecución de la conservación y/o mantenimiento del tramo vial donde presuntamente ocurrió el hecho objeto del presente proceso y mal haría el despacho en responsabilizar al **INVIAS** por hechos que no son imputables a este y en los que no tuvo participación alguna

En conclusión, respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción y desvincular al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** del presente proceso, al no ser la entidad llamada a responder por los hechos ocurridos el **6 de septiembre de 2024** en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente. Se reitera, toda vez que el **INVIAS** no está legitimada en la causa por pasiva porque la vía no se encontraba a su cargo ni mucho menos bajo su cuidado y de esa manera, debe ser absuelto de toda responsabilidad que pretenda endilgársele.

B. EN EL EXPEDIENTE NO SE HA ACREDITADO FALLA EN EL SERVICIO ENDILGADA AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** equivocadamente se le endilga una presunta falla en el servicio por no velar por el cuidado y mantenimiento de un tramo vial ubicado entre Buga – tuluá – La paila específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente. No obstante, pierde de vista la parte actora que no le corresponde al **INVIAS** el mantenimiento y cuidado de ese sector vial por disposición contractual, sino al ente a quien le hayan concesionado ese tramo vial o el propietario por disposición legal. Situación que claramente deja ver que no existe una falla en el servicio por parte del **INVIAS**, pues no existió alguna actuación u omisión que ocasionara el lamentable hecho que hoy nos ocupa en el presente litigio. En ese sentido, deberá ser desvinculada del proceso.

Al respecto, frente a la falla en el servicio el consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“(…) La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía, en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como es lo esperado o lo normal, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan; y la ineficiencia se configura cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar ese servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. (…)”

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** no desentendió ninguna obligación legal ni reglamentaria. Máxime, cuando no era la entidad encargada de la vía, es decir, esta no se encontraba bajo su supervisión. Por lo tanto, al no ser el encargado de la prestación del servicio es inocuo atribuirle algún tipo de responsabilidad, por la supuesta omisión de vigilancia y control frente a la vía donde ocurrieron los hechos objeto del presente litigio. De este modo y entendiendo que las pretensiones de la parte actora no se encuentran soportadas y adicionalmente, que el **INVIAS** no era la entidad encargada de supervisar la vía, es factible concluir que no existió omisión y/o falla en el servicio por parte del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

Corresponde a la parte activa determinar si en efecto existió la supuesta omisión y/o falla de los demandados, para que pudiera predicarse, consecuentemente, una falla en el servicio prestado por los estos. Máxime, cuando la misma no es susceptible de presunción, por lo tanto, es indispensable que el actor lo acredite. En otras palabras, se trata de esclarecer si le asiste razón a la parte actora en determinar si las obligaciones a cargo de aquellas entidades fueron efectivamente quebrantadas.

Al respecto, la jurisprudencia⁶ ha enseñado:

La Sala, de tiempo atrás, ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.

De este modo, y entendiendo que no existen elementos materiales probatorios que acrediten la supuesta omisión y /o falla en el servicio de las entidades demandas, las pretensiones señaladas en el escrito de la demanda no tienen vocación de prosperidad. En el caso particular del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, debe decirse que es claro que no hay pruebas que acrediten una falla en el servicio. Máxime cuando el tramo vial donde aparentemente ocurrieron los hechos no se encuentra a cargo de esta Entidad.

En conclusión, la falla en el servicio dentro del asunto de la referencia no se encuentra probada, pues no existe la supuesta omisión y/o falla del **INVIAS** quebrantando de esta manera el nexo de causal para obtener la declaratoria de responsabilidad. Máxime, cuando el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** no es la entidad encargada de vigilar ni mucho menos realizar mantenimiento, construcciones, instalar señalizaciones etc. De la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente. En consecuencia, ante la ausencia de los elementos necesarios para la configuración de la falla en el servicio predicada a esta entidad, los hechos deben ser tenidos como no probados y las pretensiones de la demanda necesariamente fracasar contra esta entidad.

En ese contexto, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar probada esta excepción.

C. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DEL INVIAS POR ENCONTRARSE CONFIGURADO EL EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD DENOMINADO HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO.

La ocurrencia del accidente acaecido el día **6 de septiembre de 2021** no es atribuible a las entidades demandadas, mucho menos al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**. Al contrario, como se detallará en líneas siguientes, de acuerdo con el material probatorio que obra en el plenario, se tiene acreditado que éste ocurrió como consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero determinado, en este caso, el conductor del vehículo de placas **WCR-264**, quien de manera imprudente se sale de la vía y atropella al señor **Luis Andrés Rebolledo**

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Radicación 05001-23-31-000-1994-02077-01(19723), 10 de marzo de 2011. C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo.

Palacio q.e.p.d. quien transitaba como peatón por el sector causándole la muerte de inmediato. Por lo que nótese que fue el impacto con el vehículo lo que le causó a muerte al señor **Rebolledo** y no alguna actuación u omisión de las entidades aquí demandadas. En ese sentido, esta situación exoneraría de todo tipo de responsabilidad a las entidades demandas.

La responsabilidad civil del Estado se encuentra regulada en el artículo 90 de la Constitución Política que reza lo siguiente:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

De acuerdo a lo señalado anteriormente, para que se configure la responsabilidad en cabeza del Estado, debe existir una acción u omisión causada por este. Sin embargo, en el caso concreto no se allegaron elementos materiales probatorios que den cuenta ni siquiera de la existencia de un hecho dañoso atribuible a la administración. Además, es importante mencionar que cuando por acciones u omisiones se causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución, subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento. Así se han determinado causales que exonerarían de todo tipo de responsabilidad a la Administración debido a su participación tan importante en la causación del daño alegado.

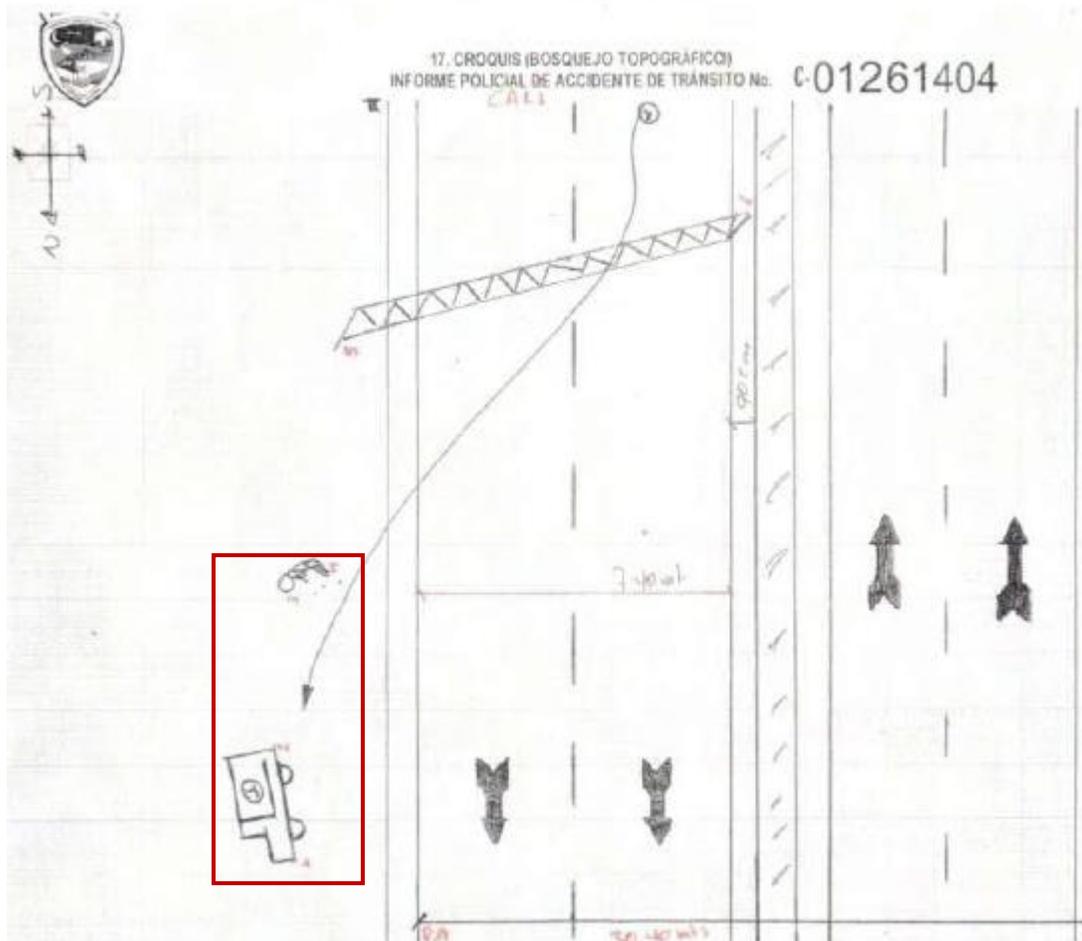
De acuerdo con el Consejo de Estado⁷,

“el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la administración en el derecho administrativo colombiano, siempre y cuando se demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal”(negrilla y subrayado por fuera del texto original).

Del examen anterior, la conducta del conductor del vehículo de placas **WCR-264** fue determinante para la ocurrencia del hecho, pues se salió del carril e impactó con el señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. Situación que como se ha explicado a lo largo del texto no fueron por acción u omisión de las entidades demandadas.

De conformidad con el material probatorio que obra en el plenario, en especial lo que se observa en el croquis del Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C-01231404 se evidencia que el vehículo de placas **WCR-264** se sale del carril vial hacia el llano o andén donde transitaba el fallecido, tal y como se evidencia en la imagen adjunta extraída del texto original:

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de Julio de 1989. Expediente 2852



Es decir que la conducta del conductor del vehículo de placas **WCR-264** fue determinante para la ocurrencia del hecho, pues se salió del carril en sentido e impactó con el transeúnte hoy fallecido. Situación que configura un hecho exclusivo y determinante de un tercero determinado y en ese sentido, exoneraría de todo tipo de responsabilidad a las entidades demandadas.

Adicionalmente, no puede el despacho pasar por alto la presunción de culpa que recae sobre quien ejerce una actividad peligrosa, en este caso el conductor y/o propietario del vehículo de placas **WCR-264**, pues de acuerdo con lo señalado por la H. Corte Constitucional, la conducción de vehículos automotores es considerada como una actividad peligrosa, tal y como lo ha señalado a continuación⁸:

CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES-Actividad peligrosa

La actividad de conducir vehículos automotores, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad peligrosa "que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión". Cuando con este tipo de actividades se causa un daño es posible reclamar la indemnización o reparación del mismo a través del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual.(...)

Por lo tanto, quienes desempeñen una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores llevan sobre su peso la presunción de culpa frente a la responsabilidad, por lo tanto, para exonerarse de responsabilidad deberá probarse que el hecho ocurrió con la contundencia de

⁸ Corte Constitucional. Sentencia T-609/14 del 25 de agosto de 2024.

una fuerza mayor, caso fortuito, culpa de la víctima o culpa de un tercero que para este el vehículo de placas **WCR-264** no se encuentra acreditada.

En conclusión, no existe responsabilidad a cargo del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** por no configurarse los elementos de la responsabilidad del Estado. En efecto, de acuerdo con el material probatorio que obra en el plenario, se tiene acreditado que éste ocurrió como consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero determinado, en este caso, el conductor del vehículo de placas **WCR-264** quien de manera imprudente se sale de la vía y atropella al señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. quien transitaba como peatón por el sector causándole la muerte de inmediato. Es decir, no existe prueba de la supuesta conducta omisiva generadora del daño alegado y en ese sentido, no habrá argumentos jurídicos para imputar responsabilidad al **INVIAS** ni a las demás entidades demandadas. Máxime, cuando, la vía donde ocurrió el supuesto accidente no se encuentra a cargo del **INVIAS**.

En ese contexto, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar probada esta excepción.

D. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA.

Coadyuvo las excepciones propuestas por el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada.

E. IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS INMATERIALES – DAÑO MORAL.

En los hechos ocurridos el día **6 de septiembre de 2021**, no hubo responsabilidad por parte del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, toda vez que en primer lugar, esta no era la entidad encargada del mantenimiento, construcción supervisión o instalación de señalización donde ocurrieron los supuestos hechos, exactamente en la carretera Buga – Tuluá – La Paila y específicamente en jurisdicción del municipio de Buga, a la altura del corregimiento Presidente; en segundo lugar, se encuentra configurada la causal de eximente de responsabilidad por la actuación imprudente del vehículo de placas **WCR-264**, quien se sale de la vía y atropella al señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. causándole la muerte de inmediato. En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios morales cuando la ocurrencia del hecho se dio por causas totalmente ajenas a la voluntad del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

Ahora bien, debe aclararse que la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para la presunta víctima. En otras palabras, es imperativo que el juez tenga en cuenta que los principios generales del derecho, la legislación y los criterios jurisprudenciales, establecen que la víctima de un hecho dañoso no puede enriquecerse como consecuencia de una indemnización. Por el contrario, la reparación únicamente debe propender por llevar a la persona al estado previo al acontecimiento del hecho. Por lo anterior y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna en cabeza de mi representada, en el evento que el honorable juez considere que sí se reúnen los elementos de la responsabilidad, deberá atender fielmente los criterios jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado que corresponden a lo siguiente:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

Por lo tanto, al no existir prueba que acredite que la ocurrencia del hecho objeto del presente litigio fue por acción u omisión de las entidades demandadas no habrá lugar a reconocimiento de indemnización por perjuicios morales.

En conclusión, es inviable el reconocimiento por daño moral en las sumas pretendidas por la parte demandante, por cuanto no se encuentra probado la responsabilidad administrativa que se pretende atribuir en cabeza de los demandados, en especial del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**. Máxime cuando los hechos ocurrieron en una vía que no se encuentra bajo su responsabilidad.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

F. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso que establece: “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se deberá de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO V. FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “HECHO PRIMERO”: Es cierto que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** fue vinculado al proceso de la referencia a través del medio de control de reparación directa para que pague a título de indemnización por perjuicios

materiales e inmateriales en favor de la parte demandante. Sin embargo, lo aquí manifestado no tiene injerencia alguna con el fundamento del llamamiento en garantía que se vinculó a mi prohijada.

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “HECHO SEGUNDO”: Es cierto de conformidad con el memorial poder que reposa en el plenario. Sin embargo, lo aquí manifestado no tiene injerencia alguna con el fundamento del llamamiento en garantía que se vinculó a mi prohijada.

II. FRENTE A LA PETICIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

En menester iniciar señalando al despacho que se de aplicación a lo consignado en el principio de congruencia, toda vez que el escrito del llamamiento en garantía debe cumplir con los mimos requisitos de una demanda. Sin embargo, verificado el escrito del llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente.

Por otra parte, respetuosamente manifiesto al despacho que, me opongo a que se le condene a pagar a mi prohijada cualquier suma de dinero a título de indemnización que no se encuentre dentro de las condiciones particulares y generales pactadas en la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho de concertar un contrato de seguro no quiere decir que opere automáticamente alguna cobertura, por cuanto el mismo se rige esencialmente por las cláusulas particulares y generales pactadas entre las partes y por supuesto por el Código de Comercio colombiano.

III. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

A. CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LO SOLICITADO EN EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Es importante iniciar señalando que deberá darse aplicación al principio de congruencia, en ese sentido no habrá lugar al reconocimiento de pretensiones que no fueron solicitadas por el llamante. En este punto, téngase en cuenta, que verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud del cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los Despachos. El artículo 281 del Código General del Proceso, contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que

este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por la demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas”.

En virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) no es válido emitir fallos *ultra petita*, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandando por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido. ii) Tampoco se pueden emitir fallos *extra petita*, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el *petitum* de la demanda. En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

(...)

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por

las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello⁹. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el juez al momento de fallar no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas. Es claro entonces que la sentencia que resuelve la demanda está sometida al principio de congruencia. Así las cosas, se evidencia a través de preceptos legales y jurisprudenciales que el Juez está en la obligación de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro de las actuaciones judiciales, a las partes intervinientes en el proceso, en el sentido de no proferir sentencia sobre aspectos adiciones a los solicitados por las partes, o que no hayan sido solicitados. Teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado, ahora es necesario aterrizar la teoría al caso concreto. Se evidencia en el escrito del llamamiento que el mismo no contiene pretensiones formuladas en contra de la compañía de seguros que represento, desconociendo lo estipulado en el artículo 82 del Código General del Proceso.

Así las cosas y de la lectura del escrito no se evidencia ninguna pretensión en la cual se solicite hacer efectiva la póliza de seguro emitida por **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, pese a que en cualquier caso ello resultaría improcedente. Razón por la cual, el Juez no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, cuando es claro que el llamante en garantía en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro emitida por mi representada.

En conclusión, se evidencia como en el presente asunto la parte no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 82 del Código General del Proceso para la presentación del llamamiento en garantía, pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello que, bajo el principio de congruencia, al juez no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de la póliza de seguro expedida por mi representada. Razón por la cual, el Juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, y de la lectura de estos documentos, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la Póliza en mención. Por lo que no procederá reconocimiento de emolumento alguno.

B. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 2201220016487.

No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022. En el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar. Por el contrario, se encuentra acreditada la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS ya que el tramo vial donde presuntamente ocurrieron los hechos no se encuentra a su cargo ya que ésta está concesionada en favor de la sociedad **PISA INFRAESTRUCTURA S.A.** Y, adicionalmente, se encuentra acreditada el eximente de responsabilidad denominado, hecho exclusivo y determinante

⁹ Sentencia T-455 de 2016, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO.

de un tercero ya que el lamentable fallecimiento del señor **Luis Andrés Rebolledo Palacio** q.e.p.d. ocurrió cuando este fue atropellado por un vehículo de placas **WCR-264** que era conducido por el señor Jairo Enrique Martínez Suarez, es decir que la muerte no la causó la valla publicitaria si no cuando el automotor lo colisiona. Por lo anterior, estas conductas indiscutiblemente exonerarían de todo tipo de responsabilidad al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone esta excepción toda vez que **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Así entonces, es necesario señalar que, al tenor de las condiciones generales documentadas la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022, el amparo que se pretende afectar con la presente acción se pactó así:

OBJETO DEL SEGURO Amparar los perjuicios patrimoniales (daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) y extra patrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación) que cause EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS a terceros; generados como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios en todo el territorio nacional. Incluyendo, pero no limitando a contratistas, subcontratistas, patronal, productos, parqueaderos, vehículos propios y no propios, contaminación, responsabilidad civil cruzada, gastos médicos y cualquier otro que sea imputable al asegurado, salvo fuerza mayor, caso fortuito (causa extraña).

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “Responsabilidad Civil Extracontractual” en que incurra el asegurado derivado de la ejecución de actividades relacionadas con el giro de negocios del asegurado. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022 entrará a responder, si y solo sí, el asegurado, es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “terceros” y siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil Contractual constituirá el “siniestro”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del C.Co Sin embargo a simple vista se aprecia que no existe cobertura material puesto que se encuentra acreditado que la vía donde presuntamente ocurrieron los hechos no es de propiedad del INVIAS, por lo que no se realizó el riesgo asegurado.

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el libelo de demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que el demandante no acreditó que efectivamente el riesgo asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios de la responsabilidad y, por consiguiente, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición *sine qua non* para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye que, al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**

No. 2201220016487 cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022 y que sirvió como sustento para demandar de forma directa mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora.

Solicito señor juez declarar probada esta excepción.

C. LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 2201220016487.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del Contrato de Seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al Asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera: “*Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro*”¹⁰

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022 en las condiciones generales señala una serie de exclusiones, que de configurarse cualquiera exonerarán de responsabilidad a mi prohijada.

Por otro lado, si bien la Circular Básica Jurídica establece que las exclusiones deben constar en la primera página de la póliza y en caracteres destacados, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023 ha aclarado que lo necesario es que deban empezar en la primera página de la póliza, más no de su carátula, y en caracteres destacados para que tengan eficacia. Criterios que se cumplen dentro del proceso, pues las exclusiones se encuentran desde la primera página del condicionado en caracteres destacados de forma ininterrumpida.

Lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

Artículo 184. Régimen de pólizas y tarifas.

(...)

2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

¹⁰ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

- a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva;
- b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y
- c. **Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza. (negrilla y subrayado por fuera del texto original).**

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil mediante la sentencia de unificación No. **SC328 del 21 de septiembre de 2023**, señaló que:

Ahora bien, con el propósito de aquilatar la hermenéutica de la norma en cuestión, debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1046 del Código de Comercio, se denomina póliza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta póliza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la carátula, en la que se consignan las Por lo que tal, condiciones particulares del artículo 1047 ibídem y las advertencias de mora establecidas en los cánones 1068 y 1152 del mismo Código; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los términos del artículo 1048 ejusdem.

En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la carátula de la póliza de la póliza misma, y que, dada esa distinción, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos básicos y las exclusiones, «en caracteres destacados» en la referida carátula.

Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es **a partir de allí** donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado.

Conforme a lo anterior, las exclusiones son eficaces siempre que consten en caracteres destacados y comiencen a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza, tal y como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia; exigencia que se cumple en el caso de marras, toda vez que las exclusiones fueron estipuladas a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza.

Sobre la ubicación de las exclusiones pactadas en el instrumento asegurativo, en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

“1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros:

Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:

1.2.1.1. En la carátula:

1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co.

1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal.

1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el

verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral". (Negrilla fuera de texto).

En ese sentido, la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de la misma, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superfinanciera a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros), conceptuando lo siguiente:

"Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor".

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

"Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento".

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones arriba señaladas o las que constan en las condiciones generales y particulares de la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

Solicito señor juez declarar probada esta excepción.

D. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá constituir fuente de enriquecimiento. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente: **“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por conceptos de: perjuicios morales no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte de esta entidad que nada tuvo que ver con las supuestas afectaciones de la vivienda objeto del litigio.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

Solicito señor juez declarar probada esta excepción.

E. LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO DE SEGURO DOCUMENTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 2201220016487.

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto se estableció un límite de **DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$10.750.000.000)**, sin embargo, **los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada.** La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1079 del Código de Comercio, el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201212006527** cuya vigencia corrió desde el 19 de julio de 2012 al 16 de junio de 2017 en el cual se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 10.750.000.000,00	\$ 10.750.000.000,00
Responsabilidad Civil patronal	\$ 10.750.000.000,00	\$ 10.750.000.000,00
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 1.005.000.000,00	\$ 2.205.000.000,00
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 350.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 8.600.000.000,00	\$ 8.600.000.000,00
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.687.500.000,00	\$ 4.085.000.000,00
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 10.750.000.000,00	\$ 10.750.000.000,00

Conforme a lo señalado anteriormente, en este caso en particular, operaría la suma asegurada equivalente a **DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$10.750.000.000)**. En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción denominada Límites máximos de responsabilidad del asegurador y condiciones de la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de

enero de 2021 al 1 de enero de 2022 los cuales enmarcan las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

Solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

F. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y DEMANDADA.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectivas la póliza de responsabilidad civil contractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las mismas.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

G. PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada. Se solicita al honorable juez que, en el remotísimo caso de encontrar responsable al asegurado y de llegar a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena.

Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, **sino por reembolso o reintegro**, pues así fue señalado en los hechos del mismo.

H. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho

valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

Solicito respetuosamente al señor Juez, declarar probada esta excepción.

I. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso que establece: "En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda"

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se deberá reconocer de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO VI. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

- **DOCUMENTALES**

1. Poder general otorgado mediante escritura pública que me faculta para actuar como apoderado general de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**
2. Certificado de existencia y representación legal de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**
3. Copia de la carátula, el condicionado particular y general del contrato de seguro, la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201220016487** cuya vigencia corrió desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022.

- **INTERROGATORIO DE PARTE**

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor **CARLOS ANDRES REBOLLEDO ESPINOSA** quien conforman la parte activa, para que en audiencia pública absuelvan el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito les formularé sobre los hechos de la demanda.

CAPÍTULO VII. NOTIFICACIONES

Al suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali (V); correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.